

CUANDO LA POBLACIÓN SE HACE PARTE DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA:

EL CASO DE LA COLABORACIÓN MEDIANTE DENUNCIAS

MANUEL GUERRERO

Introducción

Uno de los temas que emerge con fuerza de la revisión de los archivos y sumarios administrativos aplicados durante la intervención de la dictadura militar a la Universidad de Chile, es la participación de académicos, funcionarios y estudiantes que denunciaron a sus colegas o compañeros. En el contexto de lo que fueron los meses y años inmediatamente posteriores al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, ser denunciado ante las nuevas autoridades –que se hicieron del poder mediante el uso de la violencia como recurso–, implicaba ser objeto de vigilancia y expulsión, y algunos casos de detención e incluso ejecución o desaparición forzada. Este escrito explora la lógica de la colaboración civil en los contextos generados por la violencia, poniendo atención, con apoyo en autores que han trabajado estas dinámicas, en las prácticas de denuncia. Contar con elementos de análisis que permitan examinar este tópico poco estudiado resulta de vital importancia para comprender parte de la lógica mayor que opera en el Terrorismo de Estado, pues la colaboración vía denuncias es uno de los modos en que la población se hace parte de la producción *social* de la violencia.

La colaboración como violencia indirecta

Si tomamos el concepto weberiano de *lucha*, podemos entender una relación social en que la acción “se orienta por el propósito de imponer la propia voluntad contra la resistencia de la otra u otras partes”, pudiendo ésta ser –en una transición sin soluciones de continuidad–, desde pacífica –cuando en los medios de lucha no hay una violencia física efectiva–, hasta sangrienta, dirigida a la aniquilación de la vida del contrario. La lucha está políticamente orientada,

dice Weber, “cuando y en la medida en que tiende a influir en la dirección de una asociación política; en especial a la apropiación o expropiación, a la nueva distribución o atribución de los poderes gubernamentales”, entendiendo por asociación política, una asociación de dominación “en que su existencia y la validez de sus ordenaciones, dentro de un ámbito geográfico determinado, estén garantizados por un modo continuo de amenaza y aplicación de la fuerza física por parte de su cuadro administrativo”, siendo la situación de dominación caracterizada por la “presencia actual de alguien mandando eficazmente a otro” (Weber, 1999, &8 en p. 31; &16 y &17 en p. 43).

Con apoyo en esta conceptualización, en este escrito nos centraremos en las dinámicas de violencia que se ponen en movimiento como recursos de lucha política en un momento y lugar dados por parte de actores estratégicos que pugnan por el poder, poniendo en juego la pretensión del monopolio de la coacción física para estatuir un orden o mantenerlo.

En este tratamiento nos valdremos de una interpretación de esta dinámica en clave tempo–espacial que resulta sugerente para poder avanzar en la distinción de lo que caracteriza a la violencia cuando se aplican políticas de guerra irregular como las de contrainsurgencia¹. Este fue el caso de las dictaduras militares del Cono Sur que se iniciaron con el golpe de Estado de 1964 en Brasil, en el contexto de la “Guerra fría”, que en el plano militar obedecieron a la llamada “Doctrina de Seguridad Nacional”, desarrollada por Estados Unidos e implementada por varias de las Fuerzas Armadas de América Latina, en un trabajo de colaboración ante lo que se calificó como la “amenaza marxista” sobre “el mundo libre” por parte de un “enemigo interno”².

De modo general hay que señalar que en determinados conflictos de lucha política los actores *usan* la violencia para conseguir distintos objetivos. Los usos de la violencia varían de acuerdo a los objetivos que se proponen, e incluso muchas veces la violencia puede ser usada independiente de la intención de los principales actores del conflicto (Kalyvas, 2010). Intimidación, desmoralización, demostración de fuerza, publicidad, eliminación, castigo, represión, entre otros, pueden ser los usos instrumentales de la violencia que los contendientes

¹ Una discusión y revisión teórica sobre el Terrorismo de Estado, a partir de la definición weberiana de “monopolio del uso legítimo de la fuerza”, se puede encontrar en, Claridge (1996, pp. 47–63).

² Para un tratamiento bastante completo del enfoque de la Doctrina de Seguridad Nacional y su relación con la organización de la coerción en Chile durante la dictadura militar, ver Salazar (2014, cap. 1). Para la perspectiva hemisférica occidental, ver McSherry (2009). Sobre la postura al interior de las Fuerzas Armadas chilenas acerca de la guerra fría y su rol en ellas, Varas y Agüero (2011, cap. IV). Sobre los debates al interior de las Fuerzas Armadas acerca de las políticas de contrainsurgencia, Valdivia (2003, p. 27 y ss), y sobre el gobierno de la Unidad Popular en el contexto de la guerra fría, hasta el momento previo del golpe, Harmer (2013, cap. 1).

aplican para la obtención de sus objetivos. Ello, sin embargo, no agota los usos de la violencia, pues ésta puede no solo ser utilizada por los actores directos, sino también usada para fines que actores no partícipes del conflicto principal se proponen, aprovechando el contexto de oportunidad que brinda la violencia. Es decir, puede haber violencia generada en forma directa y violencia indirecta.

Cuando se hace referencia al actor que ejerce la violencia, solemos hablar de “perpetrador” de la violencia, y sobre quien ha recaído la violencia, su “víctima”. Sin embargo, más allá de esta dicotomía de uso común, también existe la violencia como subproducto de la violencia principal: saqueos y acciones de venganza, por ejemplo, por parte de quienes no participando como actores principales del conflicto se valen de la violencia que otros aplican, para alcanzar objetivos privados. Ese es el caso de la violencia indirecta que aplican quienes no son perpetradores ni víctimas y que, no obstante, participan de la producción conjunta de la violencia, mediante la denuncia o la colaboración que entrega información (muchas veces maliciosa, es decir, no veraz). Este es precisamente el caso de las denuncias que evidencian los sumarios de la Universidad de Chile intervenida durante la dictadura. Tales denuncias, en mi visión, cabe comprenderla como la generación de violencia indirecta por parte de sus autores, mediante la cual se hicieron parte de la producción social de la violencia directa.

Muchos reportes descriptivos sobre la violencia suelen enfatizar lo que podemos llamar el componente “expresivo” de la misma, esto es, aquello que, aparentemente, no persigue fin alguno. “Mataron por matar” es una expresión común, que intenta connotar la ausencia visible de motivos instrumentales por parte de quienes usan la violencia. Esta forma de encarar la violencia, especialmente la política, es la que suele quedar atrapada en el desconcierto ante su práctica, encaminándose muy fácilmente a considerar la violencia como una ocurrencia patológica, de seres monstruosos, carentes de raciocinio. No es extraño que la primera aproximación a los actos de violencia extrema que se suelen producir en contextos de enfrentamiento armado o de regímenes represivos totalitarios, sea vista como irracional, pues la deducción de intenciones y motivaciones de actores individuales es extremadamente compleja, por lo que el camino más fácil y a la mano es considerarlos carentes de motivos³. Odio, presión grupal, restitución del honor, obediencia, venganza, entre otras, pueden ser las motivaciones de la violencia, y si se pudiera establecer cuál de ellas es la que prima tras el acto violento, aún queda la difícil tarea –si es que posible–, de elucidar

³ Motivo por el cual es tan complejo de operacionalizar, en el campo de la investigación empírica de los genocidios, definiciones que enfatizan las intenciones religiosas, raciales, nacionales de sus autores. Tales motivaciones o intenciones perfectamente pueden estar traslapadas o yuxtapuestas. Sobre estas dificultades cfr. Tilly (2007).

si tales motivos son plenamente individuales o también colectivos. Ligar el tipo de acto violento, por ejemplo, detallando las atrocidades cometidas a la motivación que persigue, es también un camino complejo. Muchos, sino la mayoría, de tales actos pueden resultar absurdos para quien los observa, por la impresión o percepción que le causa un hecho violento ajeno a su escala de valores –aspecto sobre el cual Weber alertó tempranamente en la dificultad de lograr la “fantasía endopática” para descubrir motivos–. Sin embargo, quedarse al nivel de la descripción de hechos no reemplaza la comprensión de un fenómeno.

Por ello, una opción es estudiar los objetivos que se persiguen con el uso de la violencia, los que bien pueden tener distintas motivaciones individuales por parte de quienes las ejecutan. En términos genéricos se puede hacer la distinción propuesta por Jacques Sémelin (2005): la violencia puede ser usada para *exterminar* a un grupo, como puede ser usada para *controlar* a un grupo. Las técnicas y métodos de implementación de la violencia utilizados pueden ser equivalentes, pero el objetivo perseguido es claramente distinto. Esta distinción genérica resulta provechosa para la investigación empírica, pues al investigar la violencia queda claro cuando el perpetrador tiene la intención de eliminar un blanco o de someterlo bajo su control, en tanto en el segundo caso tiene la opción de rendirse y quedar vivo. En los genocidios, en cambio, –que son el caso extremo del uso de la violencia para exterminar un grupo–, “la rendición de las víctimas no evita su muerte sino que la facilita” (Fein, 1993)⁴.

Contamos, entonces, con un indicador empírico a la hora de evaluar si estamos ante un uso de la violencia que persigue la eliminación o el control (¿Tuvo la persona o colectivo la posibilidad de rendirse o habiendo usado esa opción fue igualmente eliminada?). Para un caso el uso de la violencia es un fin (la eliminación), para el otro, es un medio o recurso: se emplea violencia para el alcanzar el fin que es externo a la práctica de la violencia, controlar. El control se puede alcanzar también por medio de la persuasión, en cuyo caso éste también es un medio para un fin. Persuasión o violencia son, entonces, recursos para alcanzar un fin que es controlar, modificar, modular el comportamiento del otro.

De modo tal que el uso de la violencia, y en esto aún la extrema que puede ser calificada de barbarie, lo más probable es tenga una base racional, así como la tienen también la obediencia, el sometimiento y la colaboración. Ni los perpetradores ni sus blancos son seres irreflexivos que solo se dejan llevar por sus pasiones, ni quienes se hacen parte de la producción conjunta de la violencia por el lado civil o no combatiente, son solamente víctimas pasivas de las circunstancias o seres perversos que han cruzado la línea de la lealtades para hacerse

⁴ El concepto de uso de la violencia con el objetivo de eliminar a un grupo se puede hacer extensivo a la deportación en masa.

amigo del antes enemigo, o cambiar de bando en forma fluida. Para el tema que nos ocupa, la colaboración de parte de la población con la producción social de la violencia vía denuncias, es un fenómeno social que tiene una racionalidad que es posible de ser estudiada.

Perpetradores, víctimas, blancos y colaboradores de la violencia

La violencia como recurso implica una distinción relevante que es entre *víctimas* y *blancos* de la misma. Víctimas son quienes se vuelven objeto de la violencia sin que puedan no obedecer a la voluntad del otro, pues ellos no son el blanco de la violencia. Que una niña sea torturada para que su padre hable, implica que la niña es víctima de la violencia, pero el padre es el blanco de la misma (Kalyvas, 2010). El padre como blanco de la violencia puede eventualmente modificar o no su conducta, mientras la niña solo padece la violencia, por ello es víctima de la misma (en el caso que la niña fuese torturada para que ella revele a alguien, se vuelve víctima y blanco simultáneamente de la violencia).

Al entender la distinción entre víctima y blanco, podemos aproximarnos a la comprensión de la violencia como recurso comunicativo que tiene por finalidad conformar el comportamiento de una audiencia que esté en el blanco, mediante la alternación del valor esperado de sus acciones particulares. La violencia, por tanto, cumple una función comunicativa con clara dimensión disuasoria (Kalyvas, 2010, p. 47).

La disuasión es el objetivo de la violencia que no busca la eliminación. La violencia es coercitiva, en este sentido, porque no destruye al sujeto cuya sumisión se busca (lo que no implica que no se cometan homicidios para conseguir la sumisión de otros, esto es, se usa la violencia homicida para ejercer control, pero no al precio de eliminar a todo el grupo que se busca controlar, lo que sería una paradoja o falla de la violencia coercitiva). La violencia coercitiva toma como blancos a personas o grupos para generar una modificación en su comportamiento. Si la violencia, en este sentido, es un recurso, la decisión de utilizarla es racional, pues supone sopesar su uso para alcanzar objetivos. No hay locura en la violencia, por loca o aberrante que parezca, sino una lógica y dinámica que es posible de ser estudiada y comprendida. Se le puede utilizar en forma táctica o estratégica; o de forma retrospectiva –para castigar un hecho pasado, por ejemplo–, o prospectiva –para disuadir una acción futura por parte de otra persona–. Se le usa, como recurso, para enviar mensajes a personas o a una población, para que modifiquen sus conductas en determinada orientación. La violencia coercitiva puede llegar a ser ejemplificadora, que son los casos extremos que suelen ser vistos por los observadores como carentes de racionalidad por

su grado de barbarie (“violencia por la violencia”), cuando muy probablemente cumplen una función comunicativa: enviar un mensaje para generar sumisión⁵.

La producción de violencia puede ser generada por un actor en forma unilateral (que es el caso del Terror de Estado o del genocidio), o por varios actores (como ocurre en las guerras civiles en forma bilateral o multilateral). En escenarios con fuentes de violencia bi o multilateral, la población tiene la opción de colaborar con el actor rival, lo que lleva a que éstos también modifiquen su conducta en el uso de la violencia, pues los actores estratégicos tienen que ponderar su uso como recurso de tal forma que no empujen ellos mismos a la población a colaborar con el rival. Ello es difícil que ocurra en el caso del genocidio, por ejemplo, pues la producción unilateral de violencia tiene fines exterminatorios más que de coerción, siendo su núcleo la aniquilación intencional de un grupo, física o espacial en el caso de las deportaciones en masa (Lemkin, 1945). Existen también los exterminios recíprocos, interestatales o intraestatales, cuya producción de violencia, al igual que el genocidio, no busca gobernar a la población blanco de la violencia, sino eliminarla, lo que lleva a escaladas de aniquilación mutua.

Las opciones que tiene la población frente a la violencia como recurso son distintas, según los escenarios en que hay más de un actor que

disfrutan de monopolios de la violencia parciales y/o que se solapan. A diferencia de la producción unilateral de violencia, los individuos que son el blanco tienen la posibilidad de cambiar su apoyo y sus recursos a los actores rivales; esto es posible porque al menos un actor trata de gobernar a la población sobre la que hace blanco más que exterminarla o deportarla (en Kalyvas, 2010, p. 54).

El escenario de más de un actor como fuente de la violencia implica, entonces, la posibilidad que la población no combatiente puede acudir a actores rivales, siendo éste un factor a tener en cuenta por parte de los actores estratégicos. En el escenario de producción de violencia unilateral esta posibilidad se ve fuertemente restringida, y a veces llevada a cero, pues la población ante la no existencia de alternativas organizadas, no verá otra opción para actuar sino solo una referencia como marco posible de acción. Es el caso, en mi opinión, del Terrorismo de Estado, como el instalado en Chile a partir del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, y esto especialmente los primeros meses y años

⁵ Nathan Leites y Charles Wolf en una investigación sobre conflictos insurgentes dan cuenta del uso de mutilaciones de personas como “mensajes ambulantes”. Leites y Wolf (1970) citado por Kalyvas (2010).

de sucedido éste⁶. Esto, sin embargo, es fluctuante, pues aún en los escenarios más unilaterales existe la posibilidad de producción de resistencia a distintas escalas y con distintos grados de visibilidad y conexión con el resto de la población, la que si bien no se trata de actores que se disputan la soberanía, sí ofrecen márgenes de acción, apoyo y colaboración distintos, abriendo la cancha de lo posible y poniendo trabas a la función comunicativa de la violencia que busca lograr sumisión, facilitando con tal resistencia la emergencia, con el paso del tiempo, de alternativas organizadas por fuera del actor principal que sí disputarán la soberanía⁷.

¿Amigo o enemigo? La identificación como problema y la denuncia como fuente de información

La consideración a la cuestión del espacio y lo territorial, al que hice alusión al inicio de este escrito, es relevante para fijar el carácter distintivo de lo que llamé “guerra irregular” –a propósito de la Doctrina de Seguridad Nacional implementada en Chile–, a diferencia de lo que son las “guerras convencionales”. En estas últimas hay líneas de frente y retaguardia claramente establecidas, mientras que en las irregulares no parece haber retaguardia, o más bien, tales líneas se vuelven difusas, por lo que el “frente de batalla” está en todas partes, también tras la retaguardia (lo que, desde el punto de vista psicológico de los combatientes genera gran inseguridad, pues nunca se está completamente en una zona segura). La guerra irregular fragmenta el espacio, lo que es expresivo de que el monopolio de la violencia está siendo desafiado o, dicho de otro

⁶ Una discusión y revisión teórica sobre el Terrorismo de Estado, a partir de la definición weberiana de “monopolio del uso legítimo de la fuerza”, se puede encontrar en, Claridge (1996, pp. 47–63).

⁷ Este es el rol preponderante que creó jugó el Comité Pro Paz y luego la Vicaría de la Solidaridad durante los primeros años de la dictadura militar chilena. No habiendo otras alternativas organizadas a la vista, pues estaban siendo masacradas o habían huido o estaban en una extrema clandestinidad, el marco de acción para la Junta Militar era completamente a su favor para implementar su lógica de Terrorismo de Estado desde el monopolio total de la coacción física en todo el territorio nacional como su espacio geográfico de control máximo. Sin embargo, la emergencia del Pro Paz y la Vicaría, así como de organismos internacionales observadores de derechos humanos, lograron generar información sistemática e hicieron reclamos públicos de forma persistente, logrando un alto poder de impacto, lo que permitió cambiar el cuadro a favor, de alguna manera, de la población civil tanto blanco como víctima de la violencia unilateral del nuevo gobierno militar. Esta característica particular del caso chileno puede ser uno de los factores a la base que explique el número de víctimas de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile durante la dictadura militar, que es distinto en cantidad al de países vecinos en los que también se implementó la lógica del Terrorismo de Estado. Sobre el Comité Pro Paz y Vicaría, cfr. Ahumada (1989).

modo, el monopolio de la violencia del orden (antes) establecido ha colapsado, por medio de un desafío de base territorial. No todo es “control gubernamental” –de ahí que el monopolio está en disputa–, sino que en el mismo territorio hay una división de zonas de control en que, conforme al desarrollo del conflicto, determinadas zonas pueden caer en manos de otros actores. Mientras algunas zonas son controladas por un actor, otras lo están por otro, habiendo un espacio en disputa en el que ni uno ni otro tienen el monopolio del control. Es en estas zonas “intermedias” donde se da fundamentalmente la lucha por parte de los actores estratégicos en refriega.

En la guerra irregular la naturaleza de la soberanía –el monopolio del uso de la violencia en un territorio– está alterada, en tensión, en disputa. En ello reside, en buena parte, el carácter eminentemente político de estos conflictos. La violencia es un recurso al que recurren los actores políticos estratégicos para avanzar en el control espacial, esto es, para poner bajo su control a la población que habita en los distintos territorios. Desde la óptica de los actores en disputa por la soberanía, se pueden distinguir tres conjuntos diferentes de población: a) las que están bajo el control total de un actor estratégico; b) las que se deben “compartir” con el rival, y c) las que están fuera del control propio (y que, por lo tanto, se asume están bajo el control del actor rival). Cuando en un conflicto de estas características hay más de un actor disputándose la soberanía dentro del mismo territorio, y cada uno de ellos tiene zonas de control en las que ejerce la soberanía completa (es decir, que tal zona está bajo control propio y se logra dejar fuera del control al actor rival), se está en una situación de *soberanía segmentada*. De modo distinto, cuando dos actores políticos, o más, ejercen una soberanía limitada sobre la misma parte del territorio de un Estado, se está ante una *soberanía fragmentada*. (Kalyvas, 1980, pp. 131–133).

La especial naturaleza de la soberanía fragmentada implica una dificultad para los actores en disputa: dado que no hay línea de frente clara, sino más bien “el frente está en todas partes”, se genera el problema de la capacidad de identificación de los contendientes. ¿Cómo distinguir a los combatientes de los no combatientes? A los propios se les puede señalar de algún modo, pero ¿cómo se distingue a los “enemigos”? En una guerra irregular los “combatientes irregulares” se pueden refugiar en la población civil, lo que hace extremadamente complejo diferenciar al amigo del enemigo. Lo que no es menor, pues es la vida de cada uno la que está en juego.

Esto es lo que a muchos actores partícipes y observadores del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, les quedó registrado que los militares sublevados se caracterizaron todos con cuellos anaranjados y los civiles colaboradores del golpe con una banda de elástico en el brazo. Así lo recuerda Manuel Carrillo Vallejos, uno de los soldados conscriptos que hacía su servi-

cio militar en el regimiento Tacna, y que fue destinado a cortar, ese día martes 11 de madrugada, el tránsito en Av. Matta con Panamericana: “Salimos en tres camiones marca Pegaso y varios jeeps Land Rover (...). Quienes no usaban el cuello naranja eran gobiernistas”⁸.

El “problema de la identificación” hace difícil dar con el enemigo, neutralizarlo o eliminarlo, lo que genera problemas a quien tiene el control de determinada zona, y constituye una oportunidad para no exponerse a riesgo al actor en disputa, pues se le confunde con el resto de la población. Por ello es que se activa, entre otros, el trabajo de inteligencia, de agencias y servicios asociados, las que para captar, procesar, analizar y difundir información relevante necesitan valerse normalmente de una burocracia e infraestructura costosa. Así, por ejemplo, durante el periodo de instalación de la dictadura militar en Chile, en los meses que siguieron a septiembre de 1973, recién a partir de noviembre comenzó a trabajar una “comisión DINA”, la que en 1974 fue formalizada, contando para esa fecha con dotación de personal e infraestructura propia. Durante las primeras semanas del golpe la coerción fue prácticamente ciega, porque en general operó, para generar control, con la información que dispuso de antes del golpe por medio del análisis de fuentes abiertas (prensa fundamentalmente), sumada a la información que se fue generando post-golpe –a través de la tortura pero también por medio de las denuncias voluntarias y la colaboración civil–⁹. La coerción no contó al inicio con una unidad especializada y centralizada sino hasta la implementación de la DINA, recayendo en sus comienzos la represión en las jefaturas zonales militares de las distintas regiones. Esta situación puede explicar, en parte, la alta tasa de muertes por violencia indiscriminada que se observaron las primeras semanas que siguieron al 11 de septiembre, y el uso profuso de operativos conjuntos de allanamientos y redadas que realizó el Ejército junto a Carabineros, usualmente en las poblaciones populares. Más allá de la información inicial abierta, la coerción durante 1973 tuvo dificultades para dar con las organizaciones de sus adversarios¹⁰.

No acertar en la identificación del rival no solo implica que no se neutraliza al enemigo, sino que se corre el riesgo de confundir a éste con la población civil no combatiente, lo que lleva actuar con violencia sobre ella, acarreando el problema del rechazo y alejamiento de la población al actor que disputa la soberanía, viéndose la población lesionada por algo que no ha realizado y, de este

⁸ Declaraciones de Manuel Carrillo Vallejos en Causa Rol N°77-2011, fojas 935. Citado por Vidaurrázaga (2013, pág. 24.)

⁹ Sobre el fenómeno de la tortura, ver Dobles Oropeza (1990); Otero y López (1989), Guerrero (1999; 2000)

¹⁰ Sobre el cambio en los modelos de coerción en Chile vinculado a la generación de información, ver Policzer (2015, parte II).

modo, encontrándose tentada a pedir ayuda o directamente sumarse al actor rival por ánimo de revancha (y no necesariamente por identificación ideológica). En definitiva, el problema de la identificación que plantea la guerra irregular es un elemento que requiere de ser abordado por los actores en disputa.

Para hacer frente al desafío de la identificación, las partes en conflicto en vez de rehuir a la población, la requieren, pues en ellas está clave para acceder a la información que permita resolver el problema. El mecanismo es la colaboración. Un actor requiere de los civiles para poder identificar a los combatientes y colaboradores del bando contrario, mientras el otro requiere del apoyo de la población civil para armar su plataforma de acción (además de la identificación del enemigo infiltrado) en una zona en que no tiene el control. A diferencia de los “tiempos de paz”, en medio de un conflicto atravesado por la violencia, es difícil conocer las preferencias ideológicas de las personas si es que ello conlleva riesgos para ellas. Según quien ejerza el control en determinada zona, la población que no participa como militante o combatiente activo maneja a discreción su muestra de adhesión a tal o cual preferencia. Por lo general intenta –y esto depende del grado y tipo de control que se ejerza en la zona en que habita–, no expresar ninguna o expresarlas todas, para así no llamar la atención sobre sí, evitando ser objeto de sospecha de uno u otro bando. De modo que la preferencia ideológica no es el mejor indicador de adhesión o apoyo, pues lo actitudinal es difícil de ser observado.

Algo distinto ocurre si lo que se toma en cuenta como apoyo es el comportamiento de las personas. “Las acciones expresan prioridades”, se asume que dijo Mahatma Gandhi alguna vez, y la formulación es asertiva y lúcida. Al estar el conflicto atravesado por la violencia ejercida, en medio de la incertidumbre y en vista del colapso o tensión del sistema institucional conocido, no es raro que con el tiempo la población tienda a apoyar –excepto los combatientes y la militancia dura–, a quien le ofrezca mejores posibilidades de sobrevivir y volver a una situación de normalidad para retomar y continuar su rutina. Y ello no necesariamente ocurre porque se compartan los ideales o los máximos de tal parte, sino porque la población se da cuenta que la soberanía está en disputa. Cuando hay alternativas organizadas en tal conflicto, puede optar estratégicamente, evaluando costos, riesgos y beneficios. Pero si no existen alternativas organizadas a la vista, esto es, no hay al menos dos grupos que se observe se están disputando la soberanía con una razonable probabilidad de alcanzar un control mayor, el cuadro se restringe a un solo actor, lo que constituye un problema para la población cuando la violencia es ejercida de forma unilateral y de modo aniquilatorio, pues no tienen a quien recurrir en busca de protección y apoyo. En tales condiciones, tras la rutinización de la violencia, no resulta extraño que haya un proceso de defección, esto es, un paso al bando que ejerce

el control, para dar una señal de normalidad y no estar bajo riesgo de ser identificado con el enemigo.

A mi juicio esto es lo que, en el caso chileno, ocurrió en los días, semanas y meses siguientes tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Las fuerzas políticas depuestas fueron rápidamente derrotadas, y éstas, para salvar sus organizaciones y vidas, o bien huyeron, se asilaron, se fueron al exterior o pasaron a la clandestinidad. Esto dejó a un solo actor ejerciendo el control, usando la violencia como recurso en los distintos territorios, no contando la población civil con una alternativa organizada a la vista que pudiera prestarle apoyo y protección. De hecho parte de la alta tasa de muertes durante estos meses puede tener por una de sus causas una exitosa –aunque pavorosa, porque es basada en el miedo– colaboración de la población civil con los militares, por la vía de la denuncia a vecinos, colegas de trabajo, entre otros. Muchas de estas denuncias no tuvieron razones ideológicas, sino que fueron maliciosas y otras fueron motivadas por razones personales. En una situación de Terrorismo de Estado en que se ejerció la violencia aniquilatoria masiva de forma unilateral, la colaboración es dable que se genere como un recurso disponible para salvar ileso. Esto desde luego tiene un efecto de atomización de la sociedad, pues, como canta Luis Le-Bert del conjunto Santiago del Nuevo Extremo, cuesta “saber quién respira a mi lado”¹¹. La colaboración, de este modo, tiene una racionalidad que se puede seguir y estudiar.

El apoyo otorgado en un momento dado al actor que ejerce la violencia, no significa que será para siempre, ni que esté garantizado. Tal apoyo y adhesión es circunstancial, y puede ser contradictorio y cruzado muchas veces¹². Así lo

¹¹ Luis Le-Bert, “A mi ciudad”. En álbum de estudio del grupo Santiago del Nuevo Extremo, “A mi ciudad” (1981, sello Alerce).

¹² Es lo que se conoce en las teorías de la acción colectiva inspiradas en la teoría de la elección racional, como “el dilema del rebelde”, según el planteamiento de Mark Irving Lichbach, quien sistematizó una gran cantidad de estudios de caso de guerrillas, revoluciones, rebeliones, terrorismo y protesta social. La pregunta que guía su estudio es porqué un individuo racional estaría dispuesto a participar en una rebelión social, cuando los costos de la participación pueden ser muy altos y en el reparto de beneficios no siempre es fácil discriminar entre quienes participaron o no. Más allá del sentido común de que mientras menores sean los costos individuales de la acción disidente, mayor será la probabilidad de participación, Lichbach incorpora al análisis el costo de oportunidad de la participación y el costo de sufrir represión. Ante la alta probabilidad de que una acción disidente genere una respuesta represiva, los líderes disidentes intentan minimizar la probabilidad de tal represión optando por acciones de bajo riesgo (como grandes concentraciones en lugares públicos donde operan el poder del anonimato y de los grandes números). A su vez, los individuos tendrán incentivos para participar en acciones disidentes en la medida en que la probabilidad de éxito sea mayor (y en tanto se alcancen éxitos parciales, aumentando las expectativas de seguir participando con éxito, lo que modifica las expectativas de quienes no habían participado antes y refuerzan las de quienes ya lo hicieron). Cfr. Lichbach (1996).

señala, por ejemplo, Kalyvas luego de hacer un estudio comparativo a nivel mundial: “No importa lo profundo de las creencias ni lo poderoso de las lealtades, ellas no son los únicos factores que determinan el comportamiento. La gente puede sufrir coerción y la violencia se usa para forzar a la gente a alterar su comportamiento y para que se comporte de unos modos que pueden no sean coherentes con sus preferencias” (Kalyvas, 1980, p. 141). La modificación del comportamiento de la población para conseguir apoyo no pasa exclusivamente por conquistar “corazones y mentes” mediante persuasión no violenta.

Nuevos alineamientos de preferencias y lealtades

El uso de la violencia como recurso es clave, según lo visto hasta acá, para lograr el apoyo buscado, y en tal sentido, el apoyo pasa a ser endógeno a lo que la propia violencia –cuando no funciona el canal de la persuasión no violenta–, es capaz de generar. El apoyo que reciba uno u otro actor, no es remisible directamente a los apoyos del periodo anterior al conflicto y a la intervención de la violencia. El conflicto violento genera realineamientos de lealtades e incluso la creación de nuevas identidades forjadas durante el conflicto violento. Las motivaciones individuales para prestar o no prestar apoyo son múltiples, heterogéneas y mixtas. Ante aquella diversidad, los actores estratégicos suelen recurrir a la violencia por su función comunicativa absoluta, pues tiene alta probabilidad de modular los comportamientos (que no aseguran, sin embargo, que estén en línea con las convicciones propias de las personas, y que tal comportamiento se mantenga para siempre)¹³.

Entender el apoyo como “acción observable”, y ya no como actitud, permite a los actores distinguir entre seguidores “duros” y “blandos”; “pasivos” y “activos”; “militantes” y “simpatizantes”, entre otras denominaciones con las que se connotan el grado de involucramiento desde el punto de vista de los actos que las personas realizan.

A este respecto, resulta sugerente un informe que le fuera elaborado al director de la Dirección Inteligencia Nacional (DINA), a fines de 1973, caratulado como “Políticas a seguir con los miembros de la Unidad Popular”, en que se hacen distinciones sobre las posibilidades de colaboración entre quienes eran la base de apoyo del depuesto gobierno, que en el nuevo momento pasaron a ser objeto de persecución por parte de las Fuerzas Armadas y las agencias:

¹³ Por cierto a la coerción se pueden sumar otras motivaciones, como las compensaciones económicas, la ideología, el miedo, la venganza, el descontento, la búsqueda de status, entre muchas otras posibles.

Se cree que el contingente de la Unidad Popular en el país alcanzó, en el periodo de su auge, un porcentaje cercano al 50% de los votantes, cantidad ésta que fue progresivamente disminuyendo hasta que alcanzó el 43,5% en las elecciones de marzo de 1973.

Aquellos que tomaron parte de este contingente pueden ser clasificados, en orden decreciente de peligrosidad y activismo, en varias categorías:

En primer lugar tenemos a los extremistas, elementos fanáticos, desequilibrados, altamente peligrosos por su agresividad y capaces de matar sin titubeos. Pueden ser extranjeros o chilenos. Tienen serias inestabilidades mentales y carecen de espíritu de autocrítica, así como de una clara comprensión de sus acciones. Generalmente no son inteligentes y no poseen buena preparación técnica. Son irrecuperables.

El segundo grupo está compuesto por activistas de alta peligrosidad e inteligencia, que son técnicamente dotados y ejercen una influencia enloquecedora sobre sus grupos de trabajo. En un momento dado pueden llegar a ser violentos. Son irrecuperables.

El tercer grupo está compuesto por activistas ideológicos, quienes, mientras reflejan características de los grupos antes descritos en cuanto a peligrosidad, odian la violencia directa, prefiriendo ejercerla a través de terceros. Este grupo debiera ser analizado meticulosamente para determinar cuáles de ellos podrían ser usados técnicamente, sobreentendiéndose que deben estar bajo estricta vigilancia.

El cuarto grupo está compuesto por los militantes de los partidos de la Unidad Popular, los cuales aun cuando no son inmediatamente recuperables, es posible que con el tiempo puedan apaciguarse. Constituyen ellos una fuente de trabajo que es altamente aprovechable para el país.

El quinto grupo es aquel de los simpatizantes de la UP que sin ninguna peligrosidad, y con más razón que el grupo mayoritario, pueden ser ganados con una inteligente y exitosa política.

A nadie cabe duda alguna acerca de la aplicación absoluta de la norma que establece que cualquier jefe de servicio identificado con la UP, cualquiera sea el grado de su compromiso, debería ser removido de su cargo.

Si deseamos una patria fraternalmente unida, sin ganadores ni perdedores, ocupada exclusivamente en su rápida restauración, no deben permanecer en el país o libres por mucho tiempo, extremistas o activistas, sean chilenos o extranjeros.

Los extremistas y activistas más peligrosos deben ser deportados y otros neutralizados en algún lugar dentro del territorio nacional. Aquellos que son utilizables a causa de su menor peligrosidad y de su mayor capacidad técnica, deben ser cambiados de su lugar de trabajo. Que quede en claro que estamos en una firme e inexorable actitud de eliminar todos los elementos desequilibrantes de su nuestra patria (en Salazar, 1995, pp. 45–46).

Como se observa, el informe de inteligencia establece una taxonomía de la población que se definió como enemigo, caracterizándolo en un continuo según el grado de posibilidad de modificar su comportamiento observado, desde los “irrecuperables” hasta quienes pueden ser “ganados”. Los actores realizan este tipo de estimaciones también respecto de la población civil que saben no es militante activa en ninguno de los grupos en conflicto. Es la población que se encuentra en mayor disputa para conseguir su apoyo.

Éste es precisamente el tipo de nomenclatura que se puede observar en los archivos y sumarios desclasificados de la intervención a la Universidad de Chile durante la dictadura militar. Las etiquetas de “irrecuperables” fueron utilizadas, por ejemplo, en las denuncias a estudiantes de la carrera de Geografía tras el golpe militar.

Desde el punto de vista espacial se puede asumir, para efectos de análisis, que existen tres áreas de control por parte de los actores que participan estratégicamente en el conflicto: una zona donde ejercen soberanía completa (máximo control); una zona donde comparten soberanía con otro grupo (soberanía en disputa, usualmente fragmentada), y una zona en que no tienen control alguno. De forma equivalente, esta caracterización vale también para la población civil a la que se quiere recurrir para obtener apoyo. La población en disputa es la que sería equivalente a la “zona intermedia”. Por su parte, la población que se tiene bajo el máximo control se asume que tendrá pocas probabilidades de actuar de un modo distinto a lo que el actor que ejerce la soberanía total requiere, pues el costo de no hacerlo es máximo. Es el caso, por ejemplo, de los conscriptos en servicio militar obligatorio que participaron en las acciones del golpe de Estado de 1973 en Chile. La alternativa de no participar era cercana a cero, excepto para quienes tuvieron acciones que pueden ser calificadas, en razón de ese contexto institucional extremo, de heroicas¹⁴.

¹⁴ Personalmente tuve la posibilidad de conocer a miembros de las Fuerzas Armadas chilenas en esta condición. Estando en 1976 –tenía seis años–, en el Fuerte Silva Palma de la Armada de Chile, junto a mi madre, hermana y padre –que lo tenían preso en un recinto contiguo–, fuimos puestos bajo arresto en un calabozo que estaba repleto de “marinos constitucionalistas” que se negaron a participar de las acciones represivas contra la población civil. Para mí fue una significativa, porque además de haber estado viviendo la desaparición y encuentro de mi padre vivo,

El apoyo que provoca en parte de la población la violencia debemos considerarlo dinámico, pues puede cambiar de acuerdo a las circunstancias; relacional, en tanto depende de múltiples variables, contextos, interacciones; no requiere suponer una preferencia estable y una coincidencia de motivos ideológicos firmes y demostrada, pues lo que verdaderamente importa es la capacidad que tengan los actores estratégicos para moldear y modificar el comportamiento llevándolo hacia determinada dirección y, por último, tampoco requiere de la ilusión de la participación activa de toda la población, pues en situaciones de conflicto en que se corren riesgos, es solo una minoría la que se expone de modo frontal a costos y sanciones, mientras la mayoría tiende a actuar en una mezcla de simpatía y miedo, prudencia y oportunismo (a no ser que el contexto posibilite y facilite una participación masiva), guiados fundamentalmente por el interés de sobrevivencia. El escenario ideal para los actores estratégicos, entonces, es lograr la participación activa y exclusiva de la población a su favor (control máximo) y destruir las bases de apoyo del actor rival, logrando su identificación, aislamiento, neutralización y, eventualmente, su eliminación.

Como la participación activa y comprometida es difícil de conseguir, los actores –además de asegurar que su “cuadro administrativo”, al decir de Weber, actúe con disciplina, eficiencia y lealtad máximas–, optan porque la población tenga respecto de ellos al menos una “colaboración pasiva” pero exclusiva, siendo el mínimo el que no colaboren de forma activa con el actor rival. La insumisión es la forma más leve de no colaboración, que puede ser privada y pública, individual y colectiva, que en el fondo expresa una disidencia a nivel de las actitudes (crítica, queja, divergencias) y acciones (faltar a deberes). Informar, es normalmente una actividad de carácter individual y privado (en rigor, secreta ante la posibilidad de ser descubierto, por lo que implica riesgo para quien la realiza), que como su nombre lo indica, consiste en entregar información de un bando a otro, lo que supone acceso a ambos actores en forma simultánea (lo que es propio de una guerra irregular, pues hay ausencia de líneas de frente, situación de acceso simultáneo que en otros contextos no resulta posible).

La motivación para informar es variada, se realiza por preferencias políticas genuinas; expectativas de ganancia personal; rencores privados; coerción y chantaje, hasta consideraciones de supervivencia (Kalyvas 1980, p. 156). En un continuo, la defección es más fuerte que la insumisión, pero no al grado que

pero detenido, razón por la que fuimos arrestados –no había reconocimiento oficial que fuera un detenido, de modo que en rigor habíamos hallado a un detenido desaparecido–, en un clima en que todo lo militar era asociado a la situación de represión y angustia, estos marinos jóvenes, que llevaban meses presos, fueron amables en medio de ese contexto en que probablemente nosotros significábamos la peste. Actuar de ese modo por parte de aquellos marinos puede considerarse heroico. Sobre el tema de los marinos constitucionalistas, Magasich (2008, Vol. I y II).

implica el cambio de bando. El informar puede ser constreñido con el uso de la violencia como recurso para modelar comportamientos. Ante amenazas creíbles de sanciones, represalias o contradenuncias, los actores buscan regular el flujo de información de un bando a otro. El cambio de bando, por el contrario, es el máximo al que puede llegar la defección, pues implica la colaboración total hacia el actor rival. La ocurrencia de este tipo de conductas no es extraña –y es la que, desde el bando abandonado, es calificada normalmente como “máxima traición”, por lo que estas personas se vuelven blanco de cruentos castigos–, y dependiendo de los contextos se puede dar en forma individual y aislada, pero también de forma colectiva, en que grupos completos se pasan abiertamente al actor político rival. La defección es una acción pública que comporta un máximo riesgo, por lo que suele darse preferentemente bajo ciertos contextos posibilitadores específicos. Tales contextos tienen directa relación con la distribución del control por parte de los actores en pugna.

Hay una dinámica en que se relaciona la distribución del apoyo o colaboración con la distribución del control. En la medida que éste es más extenso (y su máximo es el dominio exclusivo de un territorio), mayor es la probabilidad de colaboración civil con tal actor. Como vimos, en el informe de inteligencia de la DINA así como en varios de los sumarios de la Universidad de Chile intervenida, incluso respecto de la población que se consideraba parte del enemigo (la UP), se establecieron distinciones respecto de aquellos que pudieran ser “ganados”, es decir, que aumentarían su colaboración con el nuevo gobierno impuesto de facto, y desertarían a su favor, cambiando de bando. Las denuncias están en directa relación con el grado de control que tiene el nuevo actor. Las preferencias de la población anteriores a la instalación de los nuevos gobernantes, en combinación con los recursos militares existentes (como el uso y exhibición de la violencia), pueden ir variando en la medida que avanza el conflicto, siendo probable que una vez la población perciba que el control es total y no hay alternativa organizada que se presente como opción por la soberanía, exceptuando a las minorías activas –que son por lo general los “combatientes” del grupo rival y sus redes más cercanas–, se enfría la intensidad de las preferencias pasadas y se opta por determinar si se colabora o no con el nuevo estado de situación. A este respecto, Kalyvas propone directamente que el control genera colaboración, transformando las preferencias previas: “cuanto más alto sea el nivel de control ejercido por un actor político en un área, más elevado será el nivel de colaboración civil con este actor político” (Kalyvas, 1980, p. 166). El control, por tanto, refuerza la colaboración, en el entendido que las preferencias se vuelven endógenas al propio conflicto.

Por ello, a mi juicio para el caso de Chile, las preferencias medidas en votos en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 no tuvieron porqué coinci-

dir con el grado de adhesión al gobierno de la Unidad Popular medido en acciones de resistencia al golpe Militar de septiembre del mismo año. El grado, tipo, intensidad y magnitud de la violencia utilizada por la oficialidad golpista de las Fuerzas Armadas y de Orden el 11 de septiembre de 1973, y los cuatro meses siguientes, jugó un papel decisivo en la modulación de los comportamientos de las mayorías. La violencia fue brutalmente eficiente como recurso: el día del golpe mismo la gente se fue y se quedó en sus casas (más allá de las instrucciones dadas por algunos partidos de la Unidad Popular en tal sentido, que llamaron a quedarse en las casas y lugares de trabajo para evitar la masacre, medida que tampoco la evitó). En una cantidad acotada de horas, el país completo estuvo bajo el control militar, excepto en muy determinados focos de resistencia armada –sin duda heroica de acuerdo al uso que dado en este escrito a tal expresión–, las que, no obstante, finalmente fueron reprimidas en el transcurso del día 11 de septiembre de 1973¹⁵. El uso del recurso a la violencia a partir del día 12 de septiembre de 1973, que podemos identificar como el esfuerzo de consolidar el control, no tuvo el mismo grado de eficiencia que el mostrado el día 11. Los días, semanas y meses siguientes, mostraron mucha improvisación de la coerción, lo que se expresa en la violencia indiscriminada aplicada en el país sin mediar combates, que evidencia que en Chile no hubo guerra civil, sino masacre.

A modo de conclusión

La violencia, según la perspectiva trabajada en este escrito y los contextos indicados, induce a parte de la población a colaborar con el actor político al que se teme y menos con el actor de preferencia propia. Y este es el papel fundamental que juega el terror en estos contextos (especialmente cuando la fuente de la violencia es unilateral). Esta colaboración no es necesariamente expresión de que al nuevo actor “se le quiere”, sino directamente que “se le teme”. Es por esta capacidad de la violencia, de moldear la colaboración, que es utilizada como recurso.

De modo tal que la colaboración, como proceso, está ligada al control, situación que puede ser desagregada analíticamente en una secuencia temporal, que

¹⁵ Sobre la resistencia en la población La Legua, Cavallo y Serrano dicen, “En ninguna parte se ha defendido al gobierno de Allende como en La Legua. Como quiere que se la juzgue, la conducta de sus habitantes es la única en todo el país que se parece a un esfuerzo de resistencia activa (...). Si hay alguna plaza en Chile que merezca llevar el nombre de Salvador Allende, en mérito a su lealtad desesperada y suicida con el Presidente, ésa es la de la Legua”, en Cavallo y Serrano (2003, pp. 200, 234, 260–262). Sobre las resistencias de Indumet, San Joaquín y La Legua, ver Vidaurrázaga (2013, cap. 8); Garcés y Leiva (2005).

grafica la transformación de los comportamientos: Si un grupo gana el control máximo en un área en el tiempo t_1 , ello puede significar que parte de la población cambie las preferencias que tenía –o que expresaba– durante el tiempo previo t_0 y que, por tanto, aumente su colaboración con el nuevo grupo que ejerce el control en el tiempo t_2 .

La coerción, sin embargo, no es el único recurso para obtener apoyo y evitar la defección hacia el bando contrario. Además de que el temor a la represión pueda activar el interés primordial por la supervivencia, se pueden poner en juego lealtades cruzadas, así como búsqueda de beneficios materiales, o sentimientos de correspondencia ideológicos, pero también asuntos personales y privados, como humillaciones pasadas que se quiere castigar o vengar, entre otros. Sin desconocer, entonces, que existen varios móviles que pueden inducir a la colaboración, la coerción es profusamente utilizada por los actores en este tipo de conflictos, pues el miedo puede producir lealtad (medida en términos de comportamiento, como colaboración), aunque ésta por sí misma no sea duradera (pues para ello se requiere la activación de otro conjunto de mecanismos, pero fundamentalmente asegurar la soberanía, es decir, consolidar el control). La experiencia internacional comparada muestra que mientras más feroz y largo es un conflicto más prevalece el interés de limitar el daño por parte de las personas, por encima de las motivaciones ideológicas¹⁶. A medida que la violencia avanza, sobrevivir se vuelve un objetivo a asegurar para parte de la población y el heroísmo voluntario se vuelve escaso¹⁷. En un contexto de estas características, no debiera extrañar que las amenazas efectivas –en términos de credibilidad–, obtengan mayores posibilidades de generar colaboración. Y esto ocurre en una relación espacial entre el control y el apoyo que se obtiene.

En efecto, en los lugares, áreas o zonas en que hay mayor control, es previsible mayor colaboración. A su vez, si tomamos la secuencia temporal de desarrollo del control (en el continuo de tiempo t_0 , t_1 y t_2 , como ejemplo), se puede plantear que la colaboración sigue una variación temporal en el control, esto es, mientras más duración tiene el control, mayor probabilidad hay que se obtenga colaboración de una parte de la población (cuyo apoyo está en disputa). Visto

¹⁶ Esta tendencia también se puede observar en contextos de prácticas genocidas, en la colaboración que existió de víctimas de guetos o campos de concentración con sus captores o verdugos, con la expectativa de generar posibilidades de sobrevivida. La “zona gris” le llamó Primo Levy a la conducta en que las víctimas se convertían en cómplices de su propia destrucción, refiriéndose a la colaboración prestada por presos en los campos nazis durante el periodo previo y durante la Segunda Guerra Mundial. Primo Levy, *Los hundidos y los salvados*, Muchnik editores, Barcelona, 2000. Un trabajo interesante y original que aborda, entre otros, este tema, pero vinculado a los usos de la música durante el Holocausto, en Gilbert (2010, especialmente la parte II de su introducción).

¹⁷ De ahí su valor y reconocimiento como altruismo extremo que llama a respeto incluso por parte de los adversarios.

de forma inversa, en los lugares, áreas o zonas donde hay menos control por parte del actor x , decrece su probabilidad de mantener o ganar colaboración. Y mientras menos tiempo lo ejerza, menor será la probabilidad de que obtenga colaboración (duradera).

Si lo anterior lo expresamos de forma relacional entre dos actores x y z , que se encuentran en disputa por el control y buscan la colaboración de la población, obtenemos que el aumento de control de x le genera mayor probabilidad de colaboración, implicando la pérdida de control de z que reduce su probabilidad de obtener colaboración. A la larga –combinando ahora lo espacial con lo temporal–, la presencia duradera del control en un área, zona o territorio –esto es, no lo olvidemos, del uso principalmente de la violencia como recurso, que genera temor ante amenazas creíbles de represión o daño–, no solamente puede generar mayores oportunidades y probabilidades de colaboración, sino que puede redundar en un cambio en las preferencias de las personas, pudiendo producirse cambios de identidades, forjándose nuevas, que pueden llegar a ser duraderas.

Destaco este componente, para apreciar el peso y efecto que tiene el uso efectivo de la violencia para de los actores políticos que la implementan: con ella configuran no sólo la colaboración de una parte de la población por medio de denuncias, sino que además pueden llegar a modular formas de ser, pensar y sentir. La violencia que se ejerce en un área de forma continua y sostenida que se convierte en control, no se limita a reflejar latencias previas al conflicto, sino que puede llegar a generar relaciones y procesos de interacción social nuevos. Las lealtades, de este modo, se vuelven endógenas respecto del ejercicio del control “en un ámbito geográfico determinado”, como le llamó Weber. De ahí que emerjan “nuevas identidades” de las personas que no necesariamente coinciden con las que expresaban antes.

La violencia transforma. No solo atomiza, sino que crea. En el caso de los sumarios y las denuncias respectivas esto queda en evidencia. Estos no muestran solamente el hecho de que una comunidad fue intervenida, sino que la Universidad de Chile durante los primeros años de la dictadura fue transformada por la violencia. La colaboración mediante denuncias a colegas y compañeros es indicativa de tal transformación y del grado de presencia y verosimilitud de la violencia como nuevo contexto y marco de la acción social.

Salir de tal estado de cosas implica destrabajar los efectos de la violencia y el control establecidos durante tanto tiempo en el espacio universitario, generando otros contextos en que otras posibilidades de ser comunidad, basados en la solidaridad, la cooperación y el respeto, sean posibles. Conocer y estudiar lo sucedido es un primer paso en tal sentido.

Bibliografía

- Ahumada, E. (et al.), (1989) *Chile: La memoria prohibida. Las violaciones a los derechos humanos 1973–1983*. Santiago, Pehuén Editores.
- Cavallo, A. y Serrano, M., (2003) *Golpe. 11 de septiembre de 1973. Las 24 horas más dramáticas del siglo 20*. Santiago, Uqbar Editores.
- Claridge, D., (1996) “State Terrorism? Applying a Definitional Model” en *Terrorism and Political Violence*, Vol. 8, Nro. 3 (Autumn 1996), pp. 47–63.
- Dobles Oropeza, I., (1990) “Apuntes sobre psicología de la tortura” en Baró, I.M. (1990) *Psicología social de la guerra*, San Salvador, UCA Editores.
- Fein, H., (1993) *Genocide: A sociological perspective*. London, Sage Publications.
- Garcés, M. y Leiva, S., (2005) *El Golpe en La Legua. Los caminos de la historia y la memoria*. Santiago, LOM ediciones.
- Gilbert, Sh., (2010) *La música en el Holocausto. Una manera de confrontar la vida en los guetos y en los campos nazis*. Buenos Aires, Eterna Cadencia
- Guerrero Antequera, M., (1999) *La tortura: poder y saber resistencial*. Documento de Trabajo N°50, Centro de Investigaciones Sociales, Universidad Arcis.
- Guerrero Antequera, M. (2000) “Reflexiones a partir de Kant y Zizek: El obsceno goce de nuestro pasado” en *Revista Investigación y Crítica*. Nro. 4, Santiago de Chile, Universidad Arcis, 2000.
- Harmer, T., (2013) *El gobierno de Allende y la guerra fría interamericana*. Santiago, Ediciones Universidad Diego Portales.
- Kalyvas, S., (2010) *La lógica de la violencia en la guerra civil*. Madrid, Akal.
- Lemkin, R., (1945) “Genocidio, un crimen moderno”, en *Free World*. Vol. 4, Abril de 1945, pp. 39– 43.
- Levi, P., (2000) *Los hundidos y los salvados*. Traducción de Pilar Gómez Bedate. Barcelona, Muchnik Editores.
- Lichbach, Mark I., (1996) *The Rebel’s Dilemma*. Ann Arbor, The University of Michigan Press.
- Magasich, J. (2008) *Los que dijeron “No” . Historia del movimiento de los marinos antigolpistas de 1973*. Vol I y II, Santiago, LOM ediciones.
- McSherry, P., (2009) *Los Estados depredadores: la Operación Cóndor y la guerra encubierta en América Latina*. Santiago, LOM.
- Otero, E. y López, R., (1989) *Pedagogía del terror. Un ensayo sobre la tortura*. Santiago, Editorial Atena.
- Policzer, P., (2015) *Los modelos del horror. Represión e información en Chile bajo la Dictadura Militar*. Santiago, LOM ediciones.
- Salazar, M., (1995) *Contreras. Historia de un intocable*. Santiago, Uqbar Editores.
- Salazar, M., (2014) *Las letras del horror, Tomo I: La DINA*. Santiago, LOM ediciones.

Sémelin, J., (2005) *Purifier et Détruire. Usages politiques des massacres et génocides*. Paris, Éditions du Seuil.

Tilly, Ch., (1978) *From Mobilization to Revolution*. McGraw–Hill, New York.

Tilly, Ch., (2007) *Violencia Colectiva*. Barcelona, Hacer.

Valdivia, V., (2003) *El golpe después del golpe. Leigh vs. Pinochet. Chile 1960–1980*. Santiago, LOM ediciones.

Varas, A. y Agüero, F., (2011) *El proyecto político militar*. Santiago, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana.

Vidaurrázaga Manríquez, I., (2013) *Martes once la primera resistencia*. Santiago, LOM Ediciones.

Weber, M., (1999) *Economía y Sociedad*. México D.F., Fondo de Cultura Económica.

MANUEL GUERRERO ANTEQUERA

Sociólogo, doctor en Sociología, diplomado en Ética de la Investigación con Seres Humanos, diplomado en Bioética Clínica, diplomado en Estudios Europeos. profesor Asistente Departamento de Bioética de la Facultad de Medicina Universidad de Chile. Profesor del Centro de Estudios de Ética Aplicada de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Integrante del Consejo Directivo de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Actualmente investigador invitado en el Centre for Research Ethics & Bioethics (CRB) de la Universidad de Uppsala, Suecia, donde trabaja en el área de la Neuroética, ligado al Human Brain Project (HBP) de la Unión Europea. Correo: mguerrero@med.uchile.cl